

**LA LEGISLACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
(SEGUNDO SEMESTRE 2017)**

—

**LA LEGISLACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
(SEGON SEMESTRE 2017)**

MARINA RODRÍGUEZ BEAS

Profesora de Derecho Administrativo

Universitat Rovira i Virgili

—

Investigadora

Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)

Sumario: 1. Introducción. 2. Novedades en ámbitos sectoriales diversos. 2.1. Protección de la atmosfera. 2.2. En materia de aguas. 2.3. Protección del medio marino. 2.4. Eficiencia energética. 3. Otras normas de interés.

1. INTRODUCCIÓN

Durante el periodo objeto de análisis (del 31 de marzo de 2017 al 1 de octubre de 2017), a nivel estatal la actividad normativa en materia ambiental ha sido escasa. Persiste la “sequía” en las políticas ambientales y en la aprobación de nuevas normas sustantivas. En efecto, tal y como se puso de manifiesto en crónicas anteriores, la práctica totalidad de las normas aprobadas tienen rango reglamentario y, por lo general, proceden a desarrollar determinados aspectos de normas de rango legal aún pendientes de desarrollo o bien responden a la modificación de las normas ya existentes para mejorar la regulación recogida por las mismas y/o para cumplir las exigencias derivadas de la Unión Europea.

Entre las normas reglamentarias aprobadas en este periodo destacamos, en particular, las aprobadas en materia de protección de la atmosfera, aguas, medio marino y eficiencia energética.

Asimismo, en el ámbito internacional destaca el compromiso del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con la lucha contra el cambio climático y el sistema de derechos de emisión durante la celebración del décimo aniversario del Partenariado Internacional de Acción de Carbono (ICAP). En este encuentro se ha suscrito una declaración conjunta en la que reafirman su compromiso con el sistema de comercio de derechos de emisión como herramienta esencial en la lucha contra el cambio climático.

En estos momentos se está gestando una iniciativa normativa de gran interés en materia ambiental, como es la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de Energía, Turismo y Agenda Digital, abrieron el pasado mes de julio el proceso de consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En cuanto a las normas reglamentarias en trámite, continua su tramitación el Proyecto de Real Decreto de transposición de la Directiva 2015/720, del

Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha abierto a consulta pública el citado proyecto el pasado mes de julio. En materia de productos y emisiones industriales, el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de julio, un proyecto de Real Decreto de modificación de diversos Reales Decretos, con el fin de reforzar la colaboración de la Administración General del Estado con las comunidades autónomas en esta materia y asegurar la aplicación uniforme, eficaz y coherente de la normativa ambiental. En particular, el proyecto de real decreto supone la modificación de cinco reales decretos: Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas; Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, de mejora de la calidad del aire; Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.

En el ámbito de la planificación, también debe destacarse que el pasado mes de abril la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente anunció la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Plan AIRE) para el periodo 2017-2019, con el consenso de todos los agentes implicados. El objetivo del nuevo Plan será reforzar las actuaciones impulsadas en el Plan AIRE actual (2013-2016) para mejorar la calidad del aire complementando las actuaciones previstas en los planes autonómicos y locales.

Por último, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha iniciado el proceso de debate para alcanzar un Pacto Nacional del Agua. Durante el pasado mes de julio, dicho Ministerio inició una primera ronda de contactos con las comunidades autónomas para acotar el ámbito del Pacto Nacional del Agua. Tras avanzar en el proceso de debate con todas las comunidades autónomas, estos encuentros se extendieron durante el mes de septiembre a todos los usuarios y a otros colectivos –asociaciones y organizaciones no gubernamentales–, ya que el objetivo del Pacto es involucrar

a los sectores y agentes implicados para alcanzar el máximo consenso en un acuerdo que dé respuesta a los principales retos de la gestión del agua.

2. NOVEDADES EN ÁMBITOS SECTORIALES DIVERSOS

2.1. Protección de la atmosfera

En el ámbito de la protección de la atmosfera, cabe destacar, en primer lugar, la aprobación del Real Decreto 655/2017, de 23 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de «fuga de carbono» y se aprueban las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015, y se prorroga su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

Este Real Decreto tiene por objeto mantener la continuidad del mecanismo de compensación de costes indirectos de CO₂ hasta el 31 de diciembre de 2020, en línea con el marco establecido por las Directrices (Comunicación de la Comisión (2012/C 158/04), sobre Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero establecidas para el periodo 2013- 2020 ambos inclusive).

Además, como se destaca en el preámbulo, también se introducen algunas modificaciones de carácter formal en relación con las bases reguladoras, en beneficio de su operatividad, por la experiencia adquirida en la gestión de la convocatoria de 20165, según lo establecido en la Orden IET/697/2015, de 13 de abril, por la que se convocan en el año 2015 las subvenciones previstas en el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre.

En segundo lugar, mediante la Orden PRA/321/2017, de 7 de abril, se regulan los procedimientos de determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO₂, NO_x, partículas y CO procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el control de los instrumentos de medida y el tratamiento y remisión de la información relativa a dichas emisiones.

Esta orden se aprueba en virtud de la disposición la disposición final sexta del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, que autoriza al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al Ministro de Industria, Energía y Turismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones de carácter técnico resulten necesarias para su correcta aplicación y en particular para modificar los anejos de acuerdo con la normativa comunitaria.

El objeto de esta orden es la regulación de los procedimientos de determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO₂, NO_X, partículas y, adicionalmente CO en las instalaciones alimentadas por combustibles gaseosos, así como del control de los instrumentos de medida y del tratamiento y remisión de la información relativa a dichas emisiones (art. 1).

En cuanto a su ámbito de aplicación, su artículo 2 establece que “se aplicará a los focos de las grandes instalaciones de combustión (GIC) que se encuentren incluidas dentro del ámbito de aplicación conjunta del capítulo V, relativo a las disposiciones especiales para las grandes instalaciones de combustión y anejo 3, relativo a las disposiciones técnicas para las grandes instalaciones de combustión del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante, Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio), tanto si se han autorizado a partir del 7 de enero de 2013, como si son anteriores a dicha fecha”.

La propia orden establece la forma de llevar a cabo la medición de las emisiones de contaminantes atmosféricos y el control de los instrumentos de medida (capítulo II). Asimismo, también prevé los requisitos de la remisión de la información de las emisiones, incluida la comunicación de la información a la Comisión Europea a través de un inventario anual de las emisiones de dióxido de inventario anual de las emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas, así como del consumo de energía y horas de funcionamiento, de todas las instalaciones del ámbito de aplicación de esta orden, a fin de dar

cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre (capítulo III y IV).

En tercer lugar, también se ha aprobado la Orden PRA/905/2017, de 21 de septiembre, por la que se modifican los anexos I y II del Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.

Esta orden se aprueba en virtud de la habilitación recogida en la disposición final tercera del Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por la cual se autoriza al Ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, al Ministro de Economía, Industria y Competitividad, al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, al Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al Ministro de Empleo y Seguridad Social para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones necesarias para actualizar y modificar los anexos de este real decreto, teniendo en cuenta los desarrollos normativos del artículo 10 del Reglamento (UE) 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Así, esta orden tiene por objeto actualizar el anexo I.6 del Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, - “certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de conmutadores eléctricos fijos que contengan gases fluorados de efecto invernadero”-, así como modificar el título del programa formativo 8 del anexo II del citado real decreto –“curso sobre manipulación de conmutadores eléctricos fijos que contengan gases fluorados de efecto invernadero-.

Por último, también puede destacarse el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. La finalidad que se persigue con estas subvenciones es incentivar y

promover la realización de actuaciones, por parte de los municipios españoles de menos de 20.000 habitantes o agrupaciones formadas por municipios de menos de 20.000 habitantes pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma, además de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono mediante la ejecución de proyectos singulares de ahorro y eficiencia energética, movilidad urbana sostenible y uso de las energías renovables, conforme a lo dispuesto en el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 (art. 1.2).

Estas subvenciones se otorgarán por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), como órgano concedente, a los proyectos singulares de economía baja en carbono, cuya inversión y promoción sea realizada por las Entidades locales -a que se refiere el artículo 5-, que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en este real decreto, por orden de prelación correspondiente a la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, en el ámbito de cada comunidad autónoma o ciudades de Ceuta o Melilla, y todo ello hasta agotar el presupuesto disponible en cada ámbito regional o hasta que expire la vigencia del Programa especificada en el artículo 11.

En cuanto a la financiación de las subvenciones previstas en el citado real decreto, su artículo 3 determina que se realizaran con cargo a los fondos FEDER incluidos en el Eje 4 de Economía Baja en Carbono del Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Sostenible (POCS) para el periodo 2014-2020, conforme a las tasas de cofinanciación aplicables para cada comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla donde radique el proyecto y que se indican en la tabla del siguiente apartado.

El propio Real Decreto establece los requisitos generales y el contenido de los proyectos singulares para acogerse a la convocatoria, estableciendo en su artículo 6 los siguientes objetivos específicos: eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos; movilidad urbana sostenible; y aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación u en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo.

2.2. En materia de aguas

En el ámbito de las aguas, destaca, por una parte, el Real Decreto 450/2017, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Plan de gestión del distrito de Cuenca fluvial de Cataluña. Este Plan de gestión se aprueba de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.6 del Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, con el contenido incluido en los anexos I y II del Decreto del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 1/2017, de 3 de enero. Este Real Decreto establece las condiciones para la realización de las infraestructuras hidráulicas promovidas por la Administración General del Estado y previstas en el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña. Se establece que serán sometidas, previamente a su realización, a un análisis sobre su viabilidad técnica, económica y ambiental por parte de la Administración General del Estado. En cualquier caso, su construcción se supeditará a la normativa vigente sobre evaluación de impacto ambiental, a las previsiones presupuestarias y a los correspondientes planes sectoriales, cuando su normativa específica así lo prevea. No obstante, esto no limita el carácter vinculante del programa de medidas en cuanto a la identificación de las actuaciones que deben quedar materializadas.

Por otra, la aprobación del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Este real decreto-ley tiene por objeto, en primer lugar, establecer medidas de apoyo a los titulares de las explotaciones agrarias situadas en los ámbitos territoriales afectados por la sequía hidrológica, es decir, la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero, Demarcación Hidrográfica del Júcar y Demarcación Hidrográfica del Segura, en el presente año 2017, cuando hayan tenido una dotación inferior o igual al 50 % de la normal, o hayan sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos de, al menos, un 20 por ciento de la producción normal en zonas desfavorecidas, y de un 30% en las demás zonas, de conformidad con los criterios establecidos por la Unión Europea.

En segundo lugar, establecer una medida de apoyo a los titulares de las explotaciones agrarias afectadas tanto por la sequía hidrológica en las anteriores cuencas como la meteorológica en todo el territorio nacional.

En tercer lugar, paliar el desequilibrio económico producido a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y a los abastecimientos de la provincia de Almería en la parte que se suministran mediante el acueducto Tajo Segura debido al uso de recursos no habituales necesarios para garantizar el abastecimiento de sus poblaciones, como consecuencia de la situación de sequía que sufre la demarcación hidrográfica del Segura.

Por último, mediante la presente norma se incrementa el tipo de gravamen correspondiente al canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, previsto en el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, al objeto de mejorar la dotación a los órganos competentes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y a los organismos de cuenca de los necesarios recursos para la protección y mejora de dicho dominio público.

Con esta finalidad, se conceden exenciones al pago del canon de regulación y en la cuota de la tarifa de utilización del agua. También se conceden exenciones en el pago de la tarifa de conducción de las aguas incluida en la Ley de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura y en la cuota de este año de la tarifa de conducción de las aguas por la infraestructura. Los beneficiarios de estas exenciones no solo serán los titulares de las explotaciones agrarias de las cuencas del Duero, del Júcar y del Segura, sino que también se beneficiará la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y los abastecimientos de la provincia de Almería en la parte que se suministran mediante el Acueducto Tajo-Segura debido al uso de recursos de agua no habituales necesarios para garantizar el abastecimiento de sus poblaciones, afectadas por la sequía en la cuenca del Segura.

Por otro lado, el citado Real Decreto establece moratorias de pagos en todo el territorio del Estado español. Así, a través de su artículo 3 se establece que las empresas y los trabajadores por cuenta propia, titulares de las explotaciones

agrarias afectadas por la sequía, tanto hidrológica como meteorológica en todo el ámbito nacional, incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los meses de julio de 2017 a febrero de 2018, ambos inclusive, así como en el pago de las cuotas por las jornadas reales correspondientes al mismo periodo. Asimismo, a través de su artículo 3, modifica el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en sus apartados 5 y 7, que quedan redactados con el siguiente contenido:

“5. El tipo de gravamen anual será del 25,5 por ciento del valor de la base imponible y la cuota íntegra será la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

7. El canon se reducirá en un 92 por ciento para las instalaciones hidroeléctricas de potencia igual o inferior a 50 MW, y un 90 por ciento para las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología hidráulica de bombeo y potencia superior a 50 MW, y en la forma que reglamentariamente se determine para aquellas producciones o instalaciones que se deban incentivar por motivos de política energética general”.

2.3. Protección del medio marino

La Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, se determinó que los Estados miembros deben designar y determinar, dentro de sus aguas marinas, el formato y el contenido de dicha ordenación, incluyendo mecanismos institucionales y, en su caso, cualquier distribución del espacio marítimo entre las distintas actividades y usos respectivamente y, para ello, están obligados a adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias a más tardar el 18 de septiembre de 2016.

Para dar cumplimiento a esta obligación, se aprueba el Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. Además, este Real Decreto se aprueba para llevar a cabo la

transposición de aquella Directiva en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, a cuyo tenor el Gobierno podrá aprobar directrices comunes a todas las estrategias marinas con el fin de garantizar la coherencia de sus objetivos.

Este Real Decreto tiene por objeto establecer un marco para la ordenación del espacio marítimo, y fomentar el crecimiento sostenible de las economías marítimas, el desarrollo sostenible de los espacios marinos y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos (art. 1).

La principal finalidad de esta planificación marina, como hemos adelantado, es la de promover el desarrollo sostenible del espacio marítimo, así como la de gestionar los usos del espacio y los conflictos que puedan surgir en las zonas marítimas. Además, como dice el preámbulo del real decreto, esta ordenación “también aspira a identificar y promover los usos múltiples, de conformidad con las políticas y normativas nacionales pertinentes”, y todo ello exige una planificación global que “identifica que la potencialidad de los espacios marítimos para los diferentes usos”.

En cuanto a su ámbito de aplicación, las disposiciones de este Real Decreto se aplican a todas las aguas marinas, incluidos el lecho, el subsuelo y los recursos naturales, en las que el Reino de España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. Asimismo, será de aplicación a la plataforma continental española. No se aplicará, entre otras, a las actividades cuyo único propósito sea la defensa o la seguridad nacional ni a la ordenación del territorio y urbanismo (art. 2).

Para determinar y aplicar una ordenación del espacio marítimo, el Capítulo II establece la obligación de elaborar un plan de ordenación del espacio marítimo para cada una de las demarcaciones marinas españolas. En estos planes se materializan los objetivos de la ordenación del espacio marítimo, los cuales:

“a) Establecerán los objetivos específicos de ordenación en cada demarcación marina, teniendo en cuenta los objetivos ambientales de las estrategias marinas y los objetivos de la planificación sectorial;

b) tendrán en cuenta aspectos económicos, sociales y medioambientales para apoyar el desarrollo y el crecimiento sostenibles en los sectores marítimos, aplicando un enfoque ecosistémico, que promoverá la

coexistencia de las actividades y usos pertinentes y el reparto socialmente equitativo del acceso a los usos;

c) contribuirán al desarrollo sostenible de los sectores marítimos, entre otros, la pesca, la acuicultura, el turismo, el patrimonio histórico, el transporte marítimo, y los aprovechamientos energéticos y de materias primas en el mar, sin menoscabo de la conservación, protección y mejora del medio ambiente marino, incluida la resiliencia a los efectos del cambio climático” (art. 5).

También se establecen los requisitos que les resultan aplicables (art. 6) así como su elaboración, tomando como referencia los mejores datos disponibles y la forma de organizar el intercambio de información.

La elaboración de los planes de ordenación marítima se llevará a cabo mediante un procedimiento regulado por el artículo 7 del Real Decreto, en el que, tras una fase de inventario de la distribución de las actividades y usos existentes y de recabar toda la información necesaria, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar hará una propuesta para cada demarcación marina, que será informada por las comunidades autónomas, el Consejo Asesor de Medio Ambiente y los ministerios afectados, así como por la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos. Tras estos trámites y el de participación pública (art. 8), la propuesta será aprobada por el Consejo de Ministros mediante real decreto.

Pero una vez aprobados los planes de ordenación del espacio marítimo, cada Departamento debe elaborar un informe sobre la aplicación de dichos planes, que se remitirá a la Dirección general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (art. 12).

El Capítulo III se destina a la cooperación entre Estados miembros de la Unión Europea cuyas aguas marines sean contiguas a las españolas, con el fin de garantizar que los planes de ordenación del espacio marítimo sean coherentes y se coordinen en toda la región marina afectada (art. 13). Además, en el citado capítulo también se prevé la cooperación con terceros países respecto de sus medidas en el ámbito de la ordenación del espacio marítimo (art. 14).

2.4. Eficiencia energética

A través del Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, se ha modificado el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Esta modificación se justifica en la necesidad de garantizar las obligaciones sustantivas de la Directiva 2010/31/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. A estos efectos, se modifican los párrafos a) y d) del artículo 2.2 del Procedimiento básico para la certificación, relativo a los ámbitos excluidos de aplicación. También se modifica la disposición adicional segunda del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, relativa a los edificios de consumo de energía casi nulo, desde la que se remite al Código Técnico de la Edificación para la determinación de los requisitos mínimos que deberán satisfacer esos edificios en cada momento.

Por otra parte, en la disposición transitoria única se regula la obtención del certificado y la obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en edificios protegidos oficialmente.

3. OTRAS NORMAS DE INTERÉS

Además de las normas reseñadas, en el periodo objeto de análisis pueden mencionarse otras normas de interés en ámbitos sectoriales diversos. Destacamos, entre ellas, en materia de organismos modificados genéticamente, el Real Decreto 364/2017, de 17 de abril, por el que se modifica el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, aprobado mediante Real Decreto 178/2004, de 30 de enero. La finalidad de esta modificación es incorporar las disposiciones de la Directiva 2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre las medidas que habrán de adoptarse para impedir la presencia accidental de organismos modificados genéticamente en otros productos y, más concretamente, las actuaciones a realizar en zonas fronterizas con otros Estados miembros vecinos que hayan prohibido el cultivo con objeto de evitar una posible contaminación

transfronteriza. En materia de vegetales la Orden APM/902/2017, de 22 de septiembre, por la que se modifica el Reglamento técnico de control y certificación de semillas de plantas forrajeras, aprobado por la Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre.

Sumari: 1. Introducció. 2. Novetats en àmbits sectorials diversos. 2.1. Protecció de l'atmosfera. 2.2. En matèria d'aigües. 2.3. Protecció del medi marí. 2.4. Eficiència energètica. 3. Altres normes d'interès.

1. INTRODUCCIÓ

Durant el període objecte d'anàlisi (del 31 de març de 2017 a l'1 d'octubre de 2017), en l'àmbit estatal l'activitat normativa en matèria ambiental ha estat escassa. Persisteix la "sequera" en les polítiques ambientals i en l'aprovació de noves normes substantives. En efecte, tal s'ha posat de manifest en cròniques anteriors, la pràctica totalitat de les normes aprovades tenen rang reglamentari i, en general, despleguen determinats aspectes de normes de rang legal encara pendents de desenvolupament o bé responen a la modificació de les normes existents per millorar la regulació que recullen o per complir les exigències derivades de la Unió Europea.

Entre les normes reglamentàries aprovades en aquest període destaquem, en particular, les que s'han aprovat pel que fa a protecció de l'atmosfera, aigües, medi marí i eficiència energètica.

Així mateix, en l'àmbit internacional destaca el compromís del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient amb la lluita contra el canvi climàtic i el sistema de drets d'emissió durant la celebració del desè aniversari del Partenariat Internacional d'Acció de Carboni (ICAP). En aquesta trobada s'ha subscrit una declaració conjunta en la qual reafirmen el seu compromís amb el sistema de comerç de drets d'emissió com a eina essencial en la lluita contra el canvi climàtic.

En aquests moments s'està gestant una iniciativa normativa de gran interès en matèria ambiental, com és la futura Llei de canvi climàtic i transició energètica. Els ministeris d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i d'Energia, Turisme i Agenda Digital, el passat mes de juliol van obrir el procés de consulta pública previ a l'elaboració de l'avantprojecte de Llei de canvi climàtic i transició energètica.

Quant a les normes reglamentàries en tràmit, continua la tramitació el Projecte de Reial decret de transposició de la Directiva 2015/720, del Parlament europeu

i del Consell, de 29 d'abril de 2015, per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE pel que fa a la reducció del consum de bosses de plàstic lleugeres. El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha obert a consulta pública el projecte esmentat el passat mes de juliol. Pel que fa a productes i emissions industrials, el Consell de Ministres va aprovar el passat mes de juliol, un projecte de reial decret de modificació de diversos reials decrets, amb la finalitat de reforçar la col·laboració de l'Administració General de l'Estat amb les comunitats autònomes sobre aquesta qüestió i assegurar l'aplicació uniforme, eficaç i coherent de la normativa ambiental. En particular, el projecte de reial decret suposa la modificació de cinc reials decrets: el Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació; el Reial decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses; el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, de millora de la qualitat de l'aire, i el Decret 833/1975, de 6 de febrer, que desplega la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.

En l'àmbit de la planificació, també cal destacar que el passat mes d'abril la ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient va anunciar l'elaboració d'un nou Pla Nacional de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera (Pla AIRE) per al període 2017-2019, amb el consens de tots els agents implicats. L'objectiu del nou Pla és reforçar les actuacions impulsades en el Pla AIRE actual (2013-2016) per millorar la qualitat de l'aire complementant les actuacions previstes en els plans autonòmics i locals.

Finalment, el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha iniciat el procés de debat per aconseguir el Pacte Nacional de l'Aigua. Durant el passat mes de juliol, aquest ministeri va iniciar una primera ronda de contactes amb les comunitats autònomes per delimitar l'àmbit del Pacte Nacional de l'Aigua. Després d'avançar en el procés de debat amb totes les comunitats autònomes, aquests es van estendre durant el mes de setembre a tots els usuaris i a altres col·lectius —associacions i organitzacions no governamentals—, ja que l'objectiu del Pacte és involucrar els sectors i agents implicats per obtenir el màxim

consens en un acord que doni resposta als principals reptes de la gestió de l'aigua.

2. NOVETATS EN ÀMBITS SECTORIALS DIVERSOS

2.1. Protecció de l'atmosfera

En l'àmbit de la protecció de l'atmosfera, cal destacar, en primer lloc, l'aprovació del Reial decret 655/2017, de 23 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1055/2014, de 12 de desembre, pel qual es crea un mecanisme de compensació de costos d'emissions indirectes de gasos d'efecte hivernacle per a empreses de determinats sectors i subsectors industrials als quals es considera que estan exposats a un risc significatiu de "fugida de carboni" i s'aproven les bases reguladores de la concessió de les subvencions per als exercicis 2014 i 2015, i se'n prorroga la vigència fins al 31 de desembre de 2020.

Aquest reial decret té per objecte mantenir la continuïtat del mecanisme de compensació de costos indirectes de CO₂ fins al 31 de desembre de 2020, en línia amb el marc establert per les Directrius —Comunicació de la Comissió (2012/C 158/04), sobre directrius relatives a determinades mesures d'ajuda estatal en el context del règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle establertes per al període 2013- 2020 ambdós inclosos.

A més, com destaca el preàmbul, també s'introdueixen algunes modificacions de caràcter formal en relació amb les bases reguladores, en benefici de la seva operativitat, per l'experiència adquirida en la gestió de la convocatòria de 20165, segons el que estableix l'Ordre IET/697/2015, de 13 d'abril, per la qual es convoquen l'any 2015 les subvencions previstes en el Reial decret 1055/2014, de 12 de desembre.

En segon lloc, mitjançant l'Ordre PRA/321/2017, de 7 d'abril, es regulen els procediments de determinació de les emissions dels contaminants atmosfèrics SO₂, NO_x, partícules i CO procedents de les grans instal·lacions de combustió, el control dels instruments de mesura i el tractament i remissió de la informació relativa a aquestes emissions.

Aquesta ordre s'aprova en virtut de la disposició final sisena del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, que autoritza el ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el ministre d'Indústria, Energia i Turisme, en l'àmbit de les seves respectives competències, a dictar les disposicions de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la seva correcta aplicació i en particular per modificar els annexos d'acord amb la normativa comunitària.

L'objecte d'aquesta ordre és la regulació dels procediments de determinació de les emissions dels contaminants atmosfèrics SO₂, NO_x, partícules i, addicionalment CO en les instal·lacions alimentades per combustibles gasosos, així com del control dels instruments de mesura i del tractament i remissió de la informació relativa a aquestes emissions (art. 1).

Quant al seu àmbit d'aplicació, l'article 2 estableix que "s'ha d'aplicar als focus de les grans instal·lacions de combustió (GIC) incloses dins de l'àmbit d'aplicació conjunta del capítol V, relatiu a les disposicions especials per a les grans instal·lacions de combustió i annex 3, relatiu a les disposicions tècniques per a les grans instal·lacions de combustió del Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, aprovat pel Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre (d'ara endavant, Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol), tant si s'han autoritzat a partir del 7 de gener de 2013, com si són anteriors a aquesta data".

La mateixa ordre estableix la manera de mesurar les emissions de contaminants atmosfèrics i el control dels instruments de mesura (capítol II). Així mateix, també preveu els requisits de la remissió de la informació de les emissions, inclosa la comunicació de la informació a la Comissió Europea a través d'un inventari anual de les emissions de diòxid d'inventari anual de les emissions de diòxid de sofre, òxids de nitrogen i partícules, així com del consum d'energia i hores de funcionament, de totes les instal·lacions de l'àmbit aplicable d'aquesta ordre, a fi d'executar el que estableix la Directiva 2010/75/UE, del Parlament europeu i del Consell, de 24 de novembre (capítols III i IV).

En tercer lloc, també s'ha aprovat l'Ordre PRA/905/2017, de 21 de setembre, per la qual es modifiquen els annexos I i II del Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips que s'hi basen, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que duguin a terme activitats que emetin gasos fluorats.

Aquesta ordre s'aprova en virtut de l'habilitació recollida en la disposició final tercera del Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, per la qual s'autoritza el ministre d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, el ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, el ministre d'Educació, Cultura i Esport, el ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i el ministre d'Ocupació i Seguretat Social per dictar, en l'àmbit de les seves respectives competències, les disposicions necessàries per actualitzar i modificar els annexos d'aquest reial decret, tenint en compte els desplegaments normatius de l'article 10 del Reglament (UE) 517/2014 del Parlament europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, sobre gasos fluorats d'efecte hivernacle i pel qual es deroga el Reglament (CE) 842/2006 del Parlament europeu i del Consell.

Així, aquesta ordre té per objecte actualitzar l'annex I.6 del Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, —“certificat acreditatiu de la competència per a la manipulació de commutadors elèctrics fixos que continguin gasos fluorats d'efecte hivernacle”—, i modificar el títol del programa formatiu 8 de l'annex II del reial decret esmentat —curs sobre manipulació de commutadors elèctrics fixos que continguin gasos fluorats d'efecte hivernacle.

Finalment, també cal destacar el Reial decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. La finalitat que es persegueix amb aquestes subvencions és incentivar i promoure la realització d'actuacions, per part dels municipis espanyols de menys de 20.000 habitants o agrupacions formades per municipis de menys de 20.000 habitants pertanyents a una mateixa comunitat autònoma, a més de les ciutats de Ceuta i Melilla, que redueixin les emissions de diòxid de carboni mitjançant l'execució de projectes singulars d'estalvi i eficiència energètica, mobilitat urbana sostenible i ús de les

energies renovables, d'acord amb el que disposa el Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020 (art. 1.2).

Aquestes subvencions s'han d'atorgar per mitjà de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), com a òrgan concedent, als projectes singulars d'economia baixa en carboni, la inversió i promoció dels quals les duguin a terme les entitats locals —a les quals es refereix l'article 5—, que compleixin amb tots i cadascun dels requisits establerts en aquest reial decret, per ordre de prelación corresponent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud, en l'àmbit de cada comunitat autònoma o ciutats de Ceuta o Melilla, i tot això fins a esgotar el pressupost disponible en cada àmbit regional o fins que expiri la vigència del Programa especificada en l'article 11.

Quant al finançament de les subvencions previstes en el reial decret esmentat, l'article 3 determina que s'han de dur a terme amb càrrec als fons FEDER inclosos en l'eix 4 d'Economia Baixa en Carboni del Programa Operatiu Plurirregional de Creixement Sostenible (POCS) per al període 2014-2020, segons les taxes de cofinançament aplicables per a cada comunitat autònoma o ciutats de Ceuta i Melilla on radiqui el projecte i que s'indiquen en la taula de l'apartat següent.

El mateix reial decret estableix els requisits generals i el contingut dels projectes singulars per acollir-se a la convocatòria, i en l'article 6 determina els objectius específics següents: eficiència energètica en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics; mobilitat urbana sostenible, i augmentar l'ús de les energies renovables per a producció d'electricitat i usos tèrmics en edificació o en infraestructures públiques, en particular afavorint la generació a petita escala en punts propers al consum.

2.2. En matèria d'aigües

En l'àmbit de les aigües, destaca, d'una banda, el Reial decret 450/2017, de 5 de maig, pel qual s'aprova el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya. Aquest pla de gestió s'aprova d'acord amb el que disposa l'article 40.6 del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, amb el contingut inclòs en els annexos I i II del Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya 1/2017, de 3 de gener. Aquest reial decret

estableix les condicions per a la realització de les infraestructures hidràuliques promogudes per l'Administració General de l'Estat i previstes en el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya. S'estableix que, prèviament a la seva realització, s'han de sotmetre a una anàlisi sobre viabilitat tècnica, econòmica i ambiental per part de l'Administració General de l'Estat. En qualsevol cas, la seva construcció se supedita a la normativa vigent sobre avaluació d'impacte ambiental, a les previsions pressupostàries i als corresponents plans sectorials, quan la seva normativa específica així ho prevegi. No obstant això, això no limita el caràcter vinculant del programa de mesures pel que fa a la identificació de les actuacions que han de quedar materialitzades.

I de l'altra, l'aprovació del Reial decret llei 10/2017, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes produïts per la sequera en determinades conques hidrogràfiques i es modifica el Text refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Aquest reial decret llei té per objecte, en primer lloc, establir mesures de suport als titulars de les explotacions agràries situades en els àmbits territorials afectats per la sequera hidrològica, és a dir, la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica del Duero, Demarcació Hidrogràfica del Xúquer i Demarcació Hidrogràfica del Segura, en el present any 2017, quan hagin tingut una dotació inferior o igual al 50% de la normal, o hagin tingut pèrdues de producció bruta en els cultius, d'almenys un 20% de la producció normal en zones desfavorides, i d'un 30% en les altres zones, de conformitat amb els criteris establerts per la Unió Europea.

En segon lloc, establir mesures de suport als titulars de les explotacions agràries afectades tant per la sequera hidrològica en les anteriors conques com la meteorològica en tot el territori nacional.

En tercer lloc, pal·liar el desequilibri econòmic produït a la Mancomunitat dels Canals del Taibilla i als proveïments de la província d'Almeria en la part que se subministren mitjançant l'aqüeducte Tajo Segura a causa de l'ús de recursos no habituals necessaris per garantir el proveïment de les seves poblacions, com a conseqüència de la situació de sequera que pateix la demarcació hidrogràfica del Segura.

Finalment, mitjançant la present norma s'incrementa el tipus de gravamen corresponent al cànon per utilització de les aigües continentals per a la producció d'energia elèctrica, previst en l'article 112 bis del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, a fi de millorar la dotació als òrgans competents del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i als organismes de conca dels recursos necessaris per a la protecció i millora d'aquest domini públic.

Amb aquesta finalitat, es concedeixen exempcions al pagament del cànon de regulació i en la quota de la tarifa d'utilització de l'aigua. També es concedeixen exempcions en el pagament de la tarifa de conducció de les aigües inclosa en la Llei de regulació del règim econòmic de l'explotació de l'aqüeducte Tajo-Segura i en la quota d'aquest any de la tarifa de conducció de les aigües per la infraestructura. Els beneficiaris d'aquestes exempcions no solament són els titulars de les explotacions agràries de les conques del Duero, del Xúquer i del Segura, sinó que també es beneficiaran la Mancomunitat dels Canals del Taibilla i els proveïments de la província d'Almeria en la part que se subministren mitjançant l'Aqüeducte Tajo-Segura a causa de l'ús de recursos d'aigua no habituals necessaris per garantir el proveïment de les seves poblacions, afectades per la sequera en la conca del Segura.

D'altra banda, el reial decret esmentat estableix moratòries de pagaments en tot el territori de l'Estat espanyol. Així, l'article 3 estableix que les empreses i els treballadors per compte propi, titulars de les explotacions agràries afectades per la sequera, tant hidrològica com meteorològica en tot l'àmbit nacional, inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, poden sol·licitar i obtenir, prèvia justificació dels danys patits, una moratòria d'un any sense interès en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents als mesos de juliol de 2017 a febrer de 2018, ambdós inclosos, així com en el pagament de les quotes per les jornades reals corresponents al mateix període. Així mateix, per mitjà de l'article 3, modifica l'article 112 bis del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, als apartats 5 i 7, que queden redactats amb el contingut següent:

“5. El tipus de gravamen anual és del 25,5% del valor de la base imposable i la quota íntegra és la quantitat resultant d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

7. El cànon es redueix en un 92% per a les instal·lacions hidroelèctriques de potència igual o inferior a 50 MW, i un 90% per a les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de tecnologia hidràulica de bombament i potència superior a 50 MW, i en la forma que reglamentàriament es determini per a les produccions o instal·lacions que s'hagin d'incentivar per motius de política energètica general”.

2.3. Protecció del medi marí

La Directiva 2014/89/UE del Parlament europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, per la qual s'estableix un marc per a l'ordenació de l'espai marítim, determina que els estats membres han de designar i fixar, dins de les seves aigües marines, el format i el contingut d'aquesta ordenació, incloent mecanismes institucionals i, si escau, qualsevol distribució de l'espai marítim entre les diverses activitats i usos respectivament i, per això, estan obligats a adoptar les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries a tot tardar el 18 de setembre de 2016.

Per executar aquesta obligació, s'aprova el Reial decret 363/2017, de 8 d'abril, pel qual s'estableix un marc per a l'ordenació de l'espai marítim. A més, aquest reial decret s'aprova per dur a terme la transposició de la directiva aplicable segons el que disposa l'article 4.2 de la Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí, segons el qual el Govern pot aprovar directrius comunes a totes les estratègies marines amb la finalitat de garantir la coherència dels seus objectius.

Aquest reial decret té per objecte establir un marc per a l'ordenació de l'espai marítim i fomentar el creixement sostenible de les economies marítimes, el desenvolupament sostenible dels espais marins i l'aprofitament sostenible dels recursos marins (art. 1).

La principal finalitat d'aquesta planificació marina, com hem avançat, és la de promoure el desenvolupament sostenible de l'espai marítim, així com la de gestionar els usos de l'espai i els conflictes que puguin sorgir a les zones

marítimes. A més, com diu el preàmbul del reial decret, aquesta ordenació “també aspira a identificar i promoure els usos múltiples, de conformitat amb les polítiques i normatives nacionals pertinents”, i tot això exigeix una planificació global que “identifica que la potencialitat dels espais marítimes per als usos diversos”.

Quant al seu àmbit d'aplicació, les disposicions d'aquest reial decret s'apliquen a totes les aigües marines, inclosos la llera, el subsòl i els recursos naturals, en què el Regne d'Espanya exerceixi sobirania, drets sobirans o jurisdicció. Així mateix, és aplicable a la plataforma continental espanyola. No s'aplica, entre altres, a les activitats l'únic propòsit de les quals sigui la defensa o la seguretat nacional ni a l'ordenació del territori i urbanisme (art. 2).

Per determinar i aplicar una ordenació de l'espai marítim, el capítol II estableix l'obligació d'elaborar un pla d'ordenació de l'espai marítim per a cadascuna de les demarcacions marines espanyoles. En aquests plans es materialitzen els objectius de l'ordenació de l'espai marítim, els quals:

a) Han d'establir els objectius específics d'ordenació en cada demarcació marina, tenint en compte els objectius ambientals de les estratègies marines i els objectius de la planificació sectorial;

b) han de tenir en compte aspectes econòmics, socials i mediambientals per donar suport al desenvolupament i creixement sostenibles en els sectors marítimes, aplicant un enfocament ecosistèmic, que ha de promoure la coexistència de les activitats i usos pertinents i el repartiment socialment equitatiu de l'accés als usos;

c) han de contribuir al desenvolupament sostenible dels sectors marítimes, entre altres, la pesca, l'aqüicultura, el turisme, el patrimoni històric, el transport marítim, i els aprofitaments energètics i de matèries primeres en el mar, sense detriment de la conservació, protecció i millora del medi ambient marí, inclosa la resiliència a l'efecte del canvi climàtic” (art. 5).

També s'estableixen els requisits que els resulten aplicables (art. 6) així com la seva elaboració, prenent com a referència les millors dades disponibles i la forma d'organitzar l'intercanvi d'informació.

L'elaboració dels plans d'ordenació marítima s'ha de dur a terme mitjançant un procediment regulat per l'article 7 del reial decret, en el qual, després d'una fase d'inventari de la distribució de les activitats i usos existents i de recaptar tota la informació necessària, la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar ha de fer una proposta per a cada demarcació marina, que ha de ser informada per les comunitats autònomes, el Consell Assessor de Medi Ambient i els ministeris afectats, així com per la Comissió Delegada del Govern per a assumptes econòmics. Després d'aquests tràmits i el de participació pública (art. 8), el Consell de Ministres ha d'aprovar la proposta mitjançant un reial decret.

Però una vegada aprovats els plans d'ordenació de l'espai marítim, cada Departament ha d'elaborar un informe sobre l'aplicació d'aquests plans, que s'ha de remetre a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar (art. 12).

El capítol III es destina a la cooperació entre estats membres de la Unió Europea les aigües marines dels quals siguin contigües a les espanyoles, a fi de garantir que els plans d'ordenació de l'espai marítim siguin coherents i es coordinin en tota la regió marina afectada (art. 13). A més, en el capítol esmentat també es preveu la cooperació amb tercers països respecte de les seves mesures en l'àmbit de l'ordenació de l'espai marítim (art. 14).

2.4. Eficiència energètica

Per mitjà del Reial decret 564/2017, de 2 de juny, s'ha modificat el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

Aquesta modificació es justifica en la necessitat de garantir les obligacions substantives de la Directiva 2010/31/UE, del Parlament europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a l'eficiència energètica dels edificis. A aquests efectes, es modifiquen els paràgrafs a) i d) de l'article 2.2 del Procediment bàsic per a la certificació, relatiu als àmbits exclosos d'aplicació. També es modifica la disposició addicional segona del Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, relativa als edificis de consum d'energia gairebé nul, des de la qual es remet al Codi tècnic de l'edificació per a la determinació dels requisits mínims que han de satisfer aquests edificis en cada moment.

D'altra banda, en la disposició transitòria única es regula l'obtenció del certificat i l'obligació d'exhibir l'etiqueta d'eficiència energètica en els edificis protegits oficialment.

3. ALTRES NORMES D'INTERÈS

A més de les normes ressenyades, en el període objecte d'anàlisi es poden esmentar altres normes d'interès en àmbits sectorials diversos. Entre les quals destaquem, pel que fa a organismes modificats genèticament, el Reial decret 364/2017, de 17 d'abril, pel qual es modifica el Reglament general per al desplegament i execució de la Llei 9/2003, de 25 d'abril, per la qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d'organismes modificats genèticament, aprovat mitjançant el Reial decret 178/2004, de 30 de gener. La finalitat d'aquesta modificació és incorporar les disposicions de la Directiva 2015/412 del Parlament europeu i del Consell, d'11 de març de 2015, sobre les mesures que han d'adoptar-se per impedir la presència accidental d'organismes modificats genèticament en altres productes i, més concretament, les actuacions que s'han de dur a terme en zones frontereres amb altres estats membres veïns que hagin prohibit el cultiu a fi d'evitar una possible contaminació transfronterera. Pel que fa als vegetals, l'Ordre APM/902/2017, de 22 de setembre, per la qual es modifica el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres, aprovat per l'Ordre ARM/3370/2010, de 27 de desembre.